



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 4 de Octubre de 2022

Vistos los autos: "Rheem S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", de los que

Resulta:

I) A fs. 87/115 se presenta Rheem S.A., con domicilio legal en esta ciudad, e inicia acción declarativa de certeza en los términos de artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Córdoba, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse frente a la pretensión de la demandada de gravar la actividad que realiza en su jurisdicción con una alícuota diferencial (más alta) para el pago del impuesto sobre los ingresos brutos, por el período fiscal correspondiente al año 2017 en razón de no poseer su establecimiento productivo en esa provincia.

Alude que por medio del Formulario de Notificación F-904 del 14 de marzo de 2017 la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba la intimó a que rectifique la declaración jurada del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al mes de enero de 2017, e ingrese la diferencia del impuesto adeudado conforme a las normas impugnadas, bajo apercibimiento de iniciar el cobro vía judicial.

Puntualmente, solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley impositiva provincial 10.412, en cuanto sostiene que la pretensión fundada en dicha norma resulta violatoria de diversos derechos y

garantías constitucionales, en particular de los artículos 9°, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 28, 31, 75, incisos 1°, 10 y 13°, y 126 de la Constitución Nacional.

Relata que Rheem S.A. es una empresa que fabrica y comercializa termotanques, termoestabilizadores, calentadores de agua, artefactos de calefacción, artículos para el hogar en general, válvulas reguladoras de temperatura para artefactos domésticos a gas, enlozado de partes de artículos para el hogar para sí y para terceros y productos metalúrgicos o plásticos afines. A su vez, explica que desarrolla tales actividades a través de una única planta de producción situada en la ciudad de San Luis de la provincia homónima y, asimismo, manifiesta que se encuentra inscripta en el régimen del Convenio Multilateral y que tributa el impuesto sobre los ingresos brutos en las distintas jurisdicciones donde comercializa sus productos.

Añade que la Provincia de Córdoba grava con el impuesto a los ingresos brutos -vg. del 4,75 % para el período 2017- a los ingresos provenientes de la actividad industrial que realiza -cuya base líquida de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio Multilateral- mientras que, según sostiene, aplica -de un modo genérico y arbitrario- una alícuota del 0,50 % a todas las industrias radicadas en su jurisdicción.

En ese contexto, aduce que la pretensión provincial constituye una invasión a las facultades exclusivas de la Nación para reglar el comercio con las naciones extranjeras y las



Corte Suprema de Justicia de la Nación

provincias entre sí (artículo 75, inciso 13, de la Constitución Nacional), e instaura una "aduanas interior" que vulnera lo prescripto por los artículos 9°, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 28, 31 y 75, incisos 1°, 10 y 13, y 126 de la Constitución Nacional. Cita jurisprudencia del Tribunal en apoyo de su postura.

Por último, desarrolla las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos para la procedencia de la acción declarativa.

II) A fs. 123 dictaminó la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, a fs. 128/129 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa e hizo lugar a la medida cautelar solicitada.

III) A fs. 191 se ordenó el desglose de la contestación de la demanda por haber sido presentada en forma extemporánea (v. nota de fs. 192).

IV) A fs. 216 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 "Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza".

Considerando:

1°) Que, tal como lo ha decidido el Tribunal a fs. 128/129, esta causa corresponde a la competencia originaria de

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2°) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de la ley provincial 10.412, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

Es sabido que la declaración de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda a un "caso" que busque precaver los efectos de un acto en ciernes, al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal, constituye causa en los términos de la Ley Fundamental (Fallos: 310:606 y 977; 311:421, entre otros).

A la luz de lo expuesto, en el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada dirigida a la aplicación de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, de la prueba documental agregada a la causa se desprende que la actividad desplegada por la autoridad provincial tiene entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad



Corte Suprema de Justicia de la Nación

de una relación jurídica, por lo que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421, precedentemente citados, entre otros).

En consecuencia, es dable concluir que se encuentran reunidos los recaudos exigidos por el artículo 322 del Código de rito, para la procedencia formal de la acción declarativa.

3°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el *sub lite* presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 ("Bayer S.A.") y en la causa CSJ 114/2014(50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que, por lo tanto, la aplicación de la ley impositiva que se cuestiona, en el caso concreto, al gravar a la actora su actividad (v. cuarto párrafo del resultando I) con la alícuota "residual" del 4,75% obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias (v. también el formulario de notificación cuya copia obra a fs. 2).

5°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el *sub examine* queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial

en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de "aduana interior" vedada por la Ley Fundamental (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Rheem S.A. y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley 10.412 de la Provincia de Córdoba, como así también la de la pretensión fiscal fundada en dicha normativa (v. formulario de notificación F-904, fs. 2). Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Nombre del actor: **Rheem S.A.**, representada por el **Dr. Juan Rafael Astibia**, con el patrocinio del **Dr. Luis M. Flores Giménez**.

Nombre del demandado: **Provincia de Córdoba**, representada por su letrada apoderada **Dra. Sonia Laura Trinidad**.